

LIBIA: LA PRIMERA GUERRA TOTALMENTE PRIVATIZADA DE LA HISTORIA MODERNA

Un informe de Javier Martín

This is a NOVACT project, funded by Devreporter with the support of ODHE, Shock Monitor and Barcelona City Council.



LA PRIMERA GUERRA TOTALMENTE PRIVATIZADA DE LA HISTORIA MODERNA

Javier Martín

Víctima del caos y la guerra desde que en marzo de 2011 la OTAN -impulsada por Francia- decidiera intervenir y contribuyera con sus misiles a la victoria de las distintas facciones rebeldes sobre la larga dictadura de Muamar el Gadafi, Libia es desde entonces escenario de un conflicto armado que en diez años ha evolucionado desde una rudimentaria guerra civil condicionada por el terrorismo de ideología yihadista a una contienda multinacional altamente sofisticada, en la que es ya el primer conflicto armado totalmente privatizado de la historia contemporánea.

Al contrario que en la guerra de Irak (2003), en la que se impulsó la tendencia con el uso regular de grupos como "blackwater", y que la guerra en Siria, donde el empleo de la Compañías Privadas de Seguridad Militar (PMSC, en sus siglas en inglés) se generalizó, en el conflicto libio no combaten ejércitos. Ni siquiera locales, ya que tanto la plataforma "Volcán de la Ira", vinculada al Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por la ONU en Trípoli y a su único aliado local, la ciudad estado de Misrata; como el llamado Ejército Nacional Libio (LNA), bajo los órdenes del controvertido mariscal Jalifa Haftar, tutor del Ejecutivo no reconocido en Tobrouk y hombre fuerte del país, no son más que una alianza interesada de milicias y señores de la guerra locales con lealtades

poco firmes.

Solo Turquía ha enviado oficialmente tropas, aunque no de combate. Y el LNA tiene una estructura que podría acercarle al de unas fuerzas armadas regulares, con uniformes y una cadena de mando consolidada y clara. El resto de los combatientes son milicias nativas y PMSC locales y extranjeras contratadas por ambos gobiernos rivales en una suerte de externalización que ofrece múltiples ventajas, especialmente para las potencias extranjeras.

COSTES, BAJAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La existencia de los mercenarios y de las PMSC no es nada nuevo, cierto. Han existido desde la Antigüedad, pero su patrón ha cambiado en los últimos cuarenta años. Desde las Alsa Masa, las fuerzas anticomunistas creadas en Filipinas en 1984 durante la presidencia del controvertido Ferdinand Marcos, a los grupos armados "el despertar", impulsados por Estados Unidos en 2006 para luchar contra la insurgencia en la regiones suníes de Irak, pasando por las tribus Janjaweed en la región sudanesa de Darfur, los Guardias Comunitarios en México e incluso los GAL en España, las milicias y organizaciones paramilitares asociadas a gobiernos han sido una constante planetaria desde, al menos, el final de Segunda Mundial. Definidas como "grupos que se identifican como progubernamentales, a los que patrocina un Ejecutivo (nacional o subnacional), que no forman parte de las fuerzas regulares de seguridad, están armados y tienen una estructura organizativa jerárquica", según la descripción clásica de Sabine C. Carey, profesora de la Universidad de Mannheim (Alemania), estas controvertidas organizaciones actúan en los límites de la legalidad, normalmente en países en conflicto o en transición, y tienen lazos más o menos estrechos, más o menos visibles con la autoridad bajo cuyos intereses prosperan.

De acuerdo con un estudio realizado por la propia Carey junto a los profesores Neil J. Mitchell, investigador del College London, y Christopher K. Butler, de la Universidad de Nuevo México, “entre 1982 y 2007 los gobiernos de cerca de sesenta países estuvieron ligados y cooperaron con grupos armados informales dentro de sus fronteras”. Una cifra y un panorama que se mantienen estables, grosso modo, una década después, pero que ahora incluyen una serie de particularidades que transforman estas entidades militarizadas en una amenaza distinta, más perturbadora y alarmante si cabe: avanzado 2019, la mayor parte de ellas —especialmente en Oriente Medio y el norte de África—, tienden a ajustarse al patrón que marcan las nuevas compañías militares privadas de seguridad al estilo de la multinacional Blackwater, cuyo uso popularizó Estados Unidos tras la invasión ilegal de Irak en 2003. Privatizado el rentable negocio de la guerra, en algunas regiones, especialmente las áreas rurales del norte del Sahel, nueva frontera meridional de Europa, o en países en conflicto crónico como Libia, trampolín de la migración irregular en el Mediterráneo, han comenzado a devenir en sólidas heterarquías, un novedoso concepto que alude a territorios gestionados por grupos armados y sostenidos en la economía informal donde la autoridad del Estado prácticamente se ha volatizado.

Más allá de sus estructura y del poder que han comenzado a acumular en los territorios en los que se han asentado, una de las preocupaciones que inquietan a los expertos es su Jael una vez que las guerras han concluido, y la amenaza que suponen tanto para la buena gobernanza como para la defensa y el respeto a los derechos humanos. Con la guerra como razón de su existencia, algunas devienen en brazos ejecutores para políticas de represión y miedo que los gobiernos no podrían asumir. Como destaca Janice E. Thomson en su obra *Mercenaries, Pirates and Sovereigns: State-building and extraterritorial violence in early Modern Europe*, “pocos gobiernos se resisten a la tentación de consentir e incluso autorizar la violencia no estatal al tiempo que niegan su responsabilidad en la misma o en la rendición de cuentas”. Existen a lo largo de las últimas décadas

multitud de ejemplos significativos. Sirva el de las milicias Jajaweed, martillo del Gobierno sudanés en la región de Darfur. Reclutada y espoleada con pretextos étnicos, esta tribu árabe tradicionalmente ligada al pastoreo y al comercio de camellos lleva sembrado el terror en el noroeste de Sudán y el este de Chad desde que en 2003 estallara una guerra con apariencia política, y rasgos evidentes de limpieza étnica. Los Janjaweed son parte del sanguinario expediente delictivo que se le imputa al expresidente de Sudán, general Omar Hasan al Bachir, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Crueldades similares a las que se le atribuyeron en la extinta Yugoslavia a grupos como los Red Baretts o los Tigres de Arkan, estos últimos salidos de una de las canteras más proliferas del milicianismo, las gradas de los estadios de fútbol. Como señala Xan Rice en su artículo [Terror link of Village spared by Janjaweed](#), las milicias y los grupos paramilitares suelen estar integradas por antiguos rebeldes, extremistas religiosos, radicales violentos del fútbol, bandidos, “caso de los Janjaweed”, o bandas formadas en las calles, como los Chimeras, usados en Haití durante el régimen de Jean Bertrand Aristide (el dictador caribeño contaba, además, con una guardia pretoriana de mercenarios entrenada por la Steele Foundation, una de las primeras PMSC estadounidenses de un sector ya entonces en expansión).

El beneficio para los gobiernos reside en que les facilita eludir la obligación de “rendir cuentas”, uno de los principios esenciales del Derecho internacional y la herramienta que impide, en los procesos de transición, que los crímenes puedan repetirse, como recuerda el periodista irlandés Pady Woodworth, autor de *Dirty war, clean hands: ETA, the GAL and the Spanish Democracy*. “Los grupos informales permiten a los gobiernos trasladar la responsabilidad y usar la represión para un dividendo estratégico al tiempo que eluden cualquier responsabilidad”, insisten igualmente Mitchell, Butler y Carey en su estudio [The impact of pro-government Militias on Human Rights Violations](#). Esta distancia tiene como principal consecuencia un aumento

significativo de los abusos y una dificultad mayor a la hora de vigilar y refrenar a las milicias, las primeras interesadas en que persista una violencia de la que se lucran. En este contexto, el descontrol es, además, mucho más acusado y peligroso cuanto más frágil es la autoridad estatal con la que se asocian. En una entrevista publicada en abril de 1987 por el diario The New York Times, uno de los líderes de Alsa Masa aseguraba que esta organización paramilitar filipina “fue útil para los militares ya que evitaba la investigación sobre los abusos de los derechos humanos” perpetrados en la ciudad de Davao.

EL CASO LIBIO

En la actualidad, el ejemplo más notable se halla en Libia, un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, en el que las milicias condicionan la agenda política e imperan sobre su economía. Especialmente en la capital, sede de un gobierno fantasma impuesto por la ONU tras el fracaso del plan de reconciliación impulsado en 2015 por el entonces enviado especial Bernardino León, que contribuyó a fortalecer el influjo de los grupos armados. Aunque sobre el papel la autoridad corresponde a la entidad liderada por Favez al Serraj, la realidad sobre el terreno demuestra que son las múltiples katibas las que imponen la ley en los barrios que ocupan. Y las que manejan los resortes económicos: el acceso al empleo, la vivienda e incluso a los servicios bancarios depende del grado de implicación con el grupo, que actúa como una familia de la mafia, pero más y mejor armada. Milicias como las Brigadas Revolucionarias de Trípoli (TRB), dirigida por el señor de la guerra Haithan Tajouri, o las Fuerzas especiales de Disuasión (RADA), liderada por Abdel Rauf Kara, no solo se reparten y compiten con otras más pequeñas en el negocio de la seguridad y el contrabando tanto de armas como de personas o combustible, si no que inciden en la política a través de los ministerios de Defensa e Interior, en los que se han infiltrado. Un negocio en el que también participan PMSC extranjeras procedentes principalmente de los Balcanes, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Catar,

Italia y Turquía, que mueve miles de millones de euros al año y que ha multiplicado las violaciones de derechos humanos sin que salpique al Gobierno, carente además de resortes para controlarlo. Son estas milicias, sólidamente asentadas en su territorio y con lazos vagos con la autoridad central, las que reciben y administran los fondos de ayuda procedentes de la cooperación exterior. Significativo es el caso de la Guardia Costera, financiada, dotada y entrenada por Italia y la Unión Europea: sus cuadros son antiguos contrabandistas reconvertidos en policías que en muchas ocasiones no han cortado sus lazos con las mafias. Otro ejemplo es el centro de detención de migrantes de Tajoura, bombardeado a principios de julio de 2019: su gestión estaba en manos de la milicia local, una de las más poderosas entre las que actúan bajo el paraguas del gobierno sostenido por la ONU y la UE. Semanas antes, la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras había denunciado las violaciones sistemáticas de los derechos de los migrantes que allí se cometían. “El uso de estos grupos, a menudo mal entrenados, y pobremente vigilados, suele abrir más oportunidades a la violencia y contribuye a que haya más violaciones de los derechos humanos”, argumentan Carey, Butler y Mitchell.

El empleo de estas compañías fue introducido en Libia por el mariscal Hafter en 2015, fecha en la que lanzó su ofensiva “Operación Dignidad” para expulsar a las milicias salafistas afines al antiguo gobierno democrático libio en Bengazi, capital del este y segunda ciudad en importancia del país y conquistar tanto la ciudad de Derna -uno de los bastiones del yihadismo en el norte de África- como el golfo de Sidrá, perla de la opulenta industria petrolera libia. Y se ha generalizado hasta desbordar todos los frentes con la entrada tanto de Rusia como de Turquía en el conflicto -junto a otros estados como Francia, Italia, Arabia Saudí, Egipto, Jordania o Qatar- en el conflicto a lo largo de 2019. El nueve de septiembre de 2019, apenas cinco meses después de que Hafter levantara el asedio a Trípoli que en abril de 2020 aún asfixia y ensangrienta la ciudad, aviones de combate no pilotados

clase “Bayraktar TB2” de fabricación turca bombardearon una posición de las fuerzas bajo el mando del LNA en la estratégica localidad de Ksar bin Ghasir, veinte kilómetros al sur de la capital libia.

Habría sido una más de las múltiples operaciones de combate que se suceden en la zona desde que el pasado cuatro de abril el controvertido oficial pusiera cerco a la capital, si no fuera por la naturaleza de las bajas causadas. Horas después del incidente, un portavoz castrense del gobierno rival sostenido por la ONU (GNA) aseguraba a la Agencia Efe que en el ataque habían muerto una decena de mercenarios rusos, miembros todos ellos de la PMSC Wagner Group, vinculada con el Kremlin. En una misión de rastreo realizada previamente en la localidad vecina de Al Sabiaa, una de sus milicias había hallado armas y documentación en ruso que supuestamente probaban la implicación bélica de Moscú -aliado tradicional de Hafter- en el cerco capitalino. “África se ha convertido en un enorme campo de batalla de la guerra entre Rusia y Occidente en lo que podemos definir como una nueva edición de la Guerra Fría, un periodo de tensión esta vez con el dinero por encima de las cuestiones ideológicas”, explica Grzegorz Kuczynski, director del programa de Euroasia en el prestigioso Warsaw Institute. “Dada la dramática situación económica de muchos de los países de África y el coste financiero relativamente bajo que se necesita para conceder ayudas esenciales a ciertos regímenes, no es ninguna sorpresa que Moscú se dedique a apoyar a más y más países en el continente negro [sic.] Los líderes africanos son conscientes, además, de que Rusia no les pedirá a cambio respeto a la democracia y a los derechos humanos”, subraya Kuczynski, uno de los mayores expertos mundiales en política rusa.

Académicos y analistas coinciden en establecer la fecha del retorno de Rusia a África en 2015, apenas unos meses después del inicio de las sanciones internacionales por los conflictos en Ucrania y Crimea. Ese año, el comercio entre Moscú y el continente se multiplicó

desde los 3.400 millones de dólares anuales a los más 14.500 millones en 2016. Según datos del reconocido centro de investigaciones sueco SIPRI, la venta de armamento y la privatización de la guerra -un negocio global creciente- fueron los puntales de un reverdecer que florece desde las cenizas de la extinta Unión Soviética y tiene como meta desplazar a las antiguas potencias coloniales, en particular a Francia. En ese corto espacio de tiempo, Rusia devino en el principal suministrador de armas a África con un 35 por ciento de la cuota del mercado, superando a Pekín (17 por ciento), Washington (9,6 por ciento) y París (6,7 por ciento). Sus principales clientes fueron sus socios tradicionales -Argelia, Egipto, Angola y Uganda-, pero también aliados de nuevo cuño como Mozambique, Nigeria, Sudán y Rwanda, donde la presencia de ingenieros, asesores políticos y mercenarios rusos se ha disparado de forma exponencial en el último lustro. Una expansión de corte neozarista, orquestada desde el Kremlin, que ha convertido a la empresa militar Rosoboronexport en la tercera más potente del continente, y a Libia y a la República Centroafricana en los pivotes que dinamizan el envite africano del presidente Vladimir Putin. “Libia, uno de los principales productores de petróleo, es un mercado atractivo para las empresas petroleras rusas que buscan competir allí con sus pares occidentales. Pero es también vital desde el punto de vista militar debido a su ubicación. Con un gobierno amigo de Rusia, Moscú ampliaría sus capacidades militares más al oeste, por ejemplo, mediante la construcción de instalaciones navales, en el Mediterráneo, formando así el eje Siria-Egipto-Libia”, argumenta Kuczynski.

En octubre de 2019, este denuedo político, militar y diplomático desembocó en una inédita conferencia internacional, celebrada en la ciudad de Sochi, a la que acudieron más de cuarenta líderes africanos y cerca de diez mil empresarios, en su mayoría rusos. Cuatro meses antes, el Foro ruso de Armamento había sido testigo de un éxito similar, con una veintena de grandes contratos firmados. “Los oligarcas rusos observan África como

una oportunidad, especialmente aquellos más próximos a Putin. Como una fuente de minerales y como un mercado de oportunidades para la industria militar”, insiste Kuczynski. “Es el escenario de una reconfiguración geoestratégica mundial tanto con la entrada de China como con el regreso de Rusia, expulsada en 1991. Ambos se benefician del retroceso de las potencias coloniales y de Estados Unidos”, agrega. Al igual que Pekín, Moscú sigue una política neoimperialista carente de prejuicios más allá del dinero. Pero gana cierta ventaja al aprovechar los rescoldos aún tibios que dejó la presencia de la URSS. Negocia igual con unos y otros, sin atender a las enemistades ancestrales que pueblan el norte de África -Argelia, Marruecos-, ni a la historia pasada o a las denuncias internacionales, como en el caso del Egipto de Abdel Fatah al Sisi, uno de sus mejores camaradas. A cambio de contratos de explotación de petróleo, gas, oro, diamantes, energía nuclear y minerales raros para empresas como Rosneft, Lukoil, Zarubezhneft, Gazprom, Rosal o Rosatom -todas presentes en África-, ofrece armamento y servicios militares varios a través del expansivo y lucrativo negocio de la Seguridad privada, al que ha llegado tarde pero con una fuerza logística y humana potencialmente superior a sus competidores. Sudán y la propia República Centroafricana son dos de los mejores ejemplos. En 2016, el entonces presidente centroafricano, Faustin Archange Touadera, -que desconfiaba de Francia- aceptó la ayuda Rusia. Cerca de 250 mercenarios de Wagner Group desembarcaron en el país para garantizar su tranquilidad. Apenas un año después, el gobierno de Bangui concedió licencias para la extracción de oro y diamantes a la empresa Lobaye Invest, propiedad del controvertido oligarca Yeugeny Prigozhin. Conocido como el restaurador del presidente Vladimir Putin -del que es amigo personal-, dueño de la mayor empresa de catering ruso y de la “granja de troll” Internet Research Agency, Prigozhin es también el principal accionista de Wagner Group y tiene sus tentáculos extendidos tanto en Libia como en Sudán.

En este último estado, sus mercenarios escoltaron al depuesto dictador Omar

Hasan al Bachir a cambio de permisos para otras dos de sus empresas minerales: M-Invest y Meroe Gold. Pese a que el tirano cayó, el llamado Consejo Transicional de Sudán -autor del incruento golpe de Estado en 2019- ha mantenido los contratos ya firmados. “Las empresas de seguridad son el gran negocio de este siglo”, explica Filip Bryjka, investigador en la Facultad de Asuntos Militares y Seguridad de la universidad de Wroclaw. No solo por los beneficios económicos que genera, también por las ventajas políticas que ofrece. Al contrario que los Ejércitos, sostenidos con dinero público y sujetos al imperio de las leyes nacionales e internacionales, la privatización de la guerra reduce los costes, elude la rendición de cuentas y evita el precio político que supone el regreso de ataúdes a casa. Es sencillo negar los vínculos con los mercenarios, obviar la responsabilidad legal y proteger la reputación frente a las denuncias de la sociedad civil. “Operaciones de combate, entrenamiento militar, consultorías de seguridad, servicio de guardaespaldas, logística y operaciones de inteligencia en una zona gris de la ley más próxima a lo prohibido que a lo moral”, destaca Bryjka.

En este escenario, Libia y su guerra civil se han erigido en los últimos cinco años en la médula de la política africana rusa. Una cabeza de puente que, más allá de su privilegiada posición geográfica en el Mediterráneo, se observa como el perno desde el que consolidar y ampliar la estrategia militar frente al músculo económico de China. “Para Putin, Libia también es una cuestión de prestigio: Rusia se esfuerza por recuperar la antigua influencia que había disfrutado en el país bajo el gobierno de Gadafi y rectificar lo que el Kremlin percibe como un error: no haber bloqueado la intervención respaldada por la OTAN en 2011”, subraya Kuczynski. En la misma línea, el comandante jefe de las fuerzas de Estados Unidos en África (AFRICOM), general Thomas Waldhauser, advertía meses atrás al Senado norteamericano que el interés de Moscú en la nación norteafricana está relacionado con el deseo de crear dificultades a la Alianza Atlántica. “Para

Rusia, Libia tiene una importancia política, económica y militar. El país sirve como una importante puerta de entrada para muchos inmigrantes a Europa, que cruzan la frontera ilegalmente. Aquí es donde Moscú busca desempeñar un papel fundamental para ejercer un impacto en los procesos de migración, tratar de utilizarlos para potencialmente desestabilizar a la Unión Europea”, insiste el experto polaco.

Cierto es que Rusia ha colocado huevos en las diferentes cestas del conflicto libio. Tanto en la del debilitado GNA como en la de la familia Al Gadafi, a la que continua protegiendo. Pero la más abundante es sin duda la que porta el mariscal Hafter, su apuesta preferente. Miembro de la cúpula golpista que aupó al poder al tirano en 1969, la biografía del controvertido oficial es una sucesión de ambiciones y traiciones. Abandonado en el campo de batalla de Chad por Al Gadafi, que observaba en su progresiva popularidad una amenaza, fue reclutado en la década de los pasados ochenta por la CIA, que le trasladó a Estados Unidos, le concedió la nacionalidad y le facilitó los medios para elevarse como el principal opositor en el exilio. De vuelta a Libia en el inicio de la revolución, necesitó tres años para convencer y dominar a los heterogéneos grupos rebeldes que se alzaron en la región oriental. Inaugurado 2014, consiguió que el entonces Parlamento electo y el Gobierno no reconocido en Tobrouk le concediera el control de todas las milicias afines. Meses después emprendió una campaña militar escalonada que le ha permitido apropiarse de la mayor parte del territorio nacional y convertirse en un actor político clave, fundamental en cualquier proceso de pacificación.

Carente de un Ejército regular al uso, Hafter ha maniobrado y usado con inteligencia tanto el apoyo económico, político y militar de sus aliados árabes -Egipto, Arabia Saudí, Jordania y Emiratos Arabes Unidos, que le han provisto de la superioridad aérea necesaria- como las ventajas que ofrecen las diversas PMSC para forjar su alternativa y asegurarse una posición negociadora dominante. En especial las empresas rusas, pese a que éstas solo conciten un cinco por ciento de

un negocio global en alza. La primera de ellas, RSB Group. Propiedad de Oleg Krinitsyn y vinculada a la compañía naviera neozelandesa Navsec Group Ltd., cerca de un centenar de sus hombres desembarcaron en Bengasi en 2017. Expulsados los grupos yihadistas en Derna y en la propia capital del este -a los que Hafter abrió un pasillo hacia Sirte para generar complicaciones a Misrata y Trípoli-, el mariscal necesitaba del apoyo de una empresa especializada en minado y protección de instalaciones petroleras para garantizar la seguridad de sus conquistas en el golfo de Sidrá, diamante de la industria energética en Libia. Y RSB ya había demostrado su efectividad en una tarea similar en Siria. Wagner Group fue la segunda. Dirigida por Dimitry “Wagner” Utkin, un teniente general retirado que dirigió dos de las principales brigadas de elite del Ejército ruso, su especialidad es el combate en vanguardia. Formados -en su mayoría- en las unidades Alpha y Vimpel, adscritas a la Dirección Principal de Inteligencia (GRU) y el FSB, cuenta con cuatro brigadas de asalto, una de tanques, tres de comunicación, una de reconocimiento e inteligencia y otra de ingeniería que se entrenan en una base en Molkina (Krasnodar) y atesoran años de experiencia. Primero en el sitio de Donbás y después en la guerra de Siria, donde desempeñaron un papel primordial en la batalla de Palmira, librada en marzo de 2016. Necesitado de fuerzas de elite en primera línea, más de un millar de ellos desembarcaron en Bengasi vía Latakia a finales de 2018 para preparar el asalto a la capital. “La guerra civil de Libia se está transformando en una guerra de poder entre Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Egipto, por un lado, y Turquía, Qatar e Italia, por el otro. Las dos partes en conflicto seguirán enviando más contratistas y militantes para ofrecer apoyo tanto al gobierno de Trípoli como a Hafter”, señala Kuczynski. “Las fuerzas mercenarias rusas ofrecen un valioso refuerzo para las fuerzas de Hafter debido a su experiencia en combate y habilidades especiales. Aunque el gobierno de Trípoli había documentado entre 600 y 800 combatientes rusos en Libia, se creía que este número era mucho menor hasta

principios de enero. Sin embargo, ha comenzado a crecer bruscamente a raíz de la llegada de las empresas mercenarias privadas Moran y Schieft, en respuesta a la entrada de milicias sirias”, recalca.

Según la web Italmiradar, soldados de fortuna de esta dos últimas empresas aterrizaron en Bengasi en la primera semana de este año a bordo de sendos aviones de transporte militar procedentes de una base aérea en Latakia. Moran Group, vinculada a Slavonic Corps, con base en Hong Kong y experiencia en el norte del Cáucaso y Tajikistán, está especializada en escolta de unidades y en tráfico marítimo. Presente en la guerra en Siria, donde combatió a los extremistas de Jays al Islam en Al Sukhnah y Homs, ha realizado igualmente misiones contra la piratería en el cuerno de África. Schiff Group, por su parte, tiene como principal activo su pericia en la protección de instalaciones petroleras, como también demostró en Siria. Ambas desembarcaron en un momento en el que Hafter buscaba apuntalar sus conquistas en el oeste y garantizar el transporte marítimo, tanto de armas como de petróleo. “El reciente crecimiento en el número de mercenarios rusos, pagados por las monarquías del Pérsico, sirve para contrarrestar la afluencia de insurgentes sirios, previamente redistribuidos por Turquía. Las que entran en el juego son las compañías mercenarias rusas que aprovechan la escasez de personal (de otras), ya que los contratistas operan en muchos otros países”, concluye Kuzcinsky.

Pero no solo ha recurrido a Rusia. Hafter se ha beneficiado, igualmente, de los servicios de diversas PMSC árabes, igualmente presentes en un negocio, el de privatizar la guerra, que mueve más de 225.000 millones de euros al año. Conocedor del terreno, el mariscal sumó milicias sudanesas y chadianas a su campaña del sur, que culminó con éxito a finales de 2018 y le sirvió para arrebatar al GNA los recursos petroleros del oeste. A través de una antigua base aérea gadafista instalada en el oasis meridional de Jufrah, se han unido a su ofensiva mercenarios del Movimiento Justicia e Igualdad, de Abdelkarim Cholloy Konti, del Movimiento

de Liberación de Sudán (Minni Minawi), de Haber Ishak y del Movimiento de Liberación de Sudán Abdel Wahib, de Yusif Ahmad Yusif “Karjakola”, todos ellos imprescindibles para garantizar el control de la frontera y del yacimiento de Al Sahara, que explotan multinacionales como TOTAL o Repsol. Al cerco de Trípoli y Misrata se incorporaron en julio de 2019 cerca de 4.000 mercenarios de Rapid Support Forces, vinculadas al nuevo gobierno militar en Jartum. Dirigidas por Mohamad Hamdam Dagalo “Hemadti”, miembro destacado del Consejo Transaccional de Sudán que derrocó a Omar Hasan al Bachir, es una fuerza de unos 30.000 hombres procedente de las milicias árabes “Janjaweed”, acusadas de crímenes de guerra en la región de Darfur y supuestamente vinculadas a Dickens&Manson, una empresa pantalla en Canadá. Armadas y financiadas desde Abu Dhabi y Riad, han compartido frente de batalla con fuerzas de ambos países en la guerra en Yemen. Como el resto, Rapid Support Forces aparecen también vinculadas al tráfico de personas, de armas y combustible en la región.

Gracias a sus antiguos lazos con las tribus Tebu y Taureg que habitan el sur de Libia, Hafter cuenta asimismo en sus filas con fuerzas paramilitares chadianas, en particular el Frente para la Alternancia y el Control de Chad, liderada por Mahdi Ali Mahamat, que tiene unos 700 hombres en Jufrah y a la que el mariscal conoce de sus años de guerra en la región minera del Aouzou, y la Unión de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo, de Mahamat Nari. Igualmente ha recurrido a milicias privadas locales madkhalies para combatir a los grupos yihadistas. Fundado en la pasada década de los noventa por Rabi’ bin Hadi ‘Umayr al-Madkhali, un clérigo próximo a la familia Real saudí, el movimiento Madkhali es una interpretación hereje del Islam que defiende el salafismo extremo no violento, y combate al yihadismo. Presente en Libia desde tiempos de Al Gadafi, se concentra en cinco grandes milicias en la región este -Batallón Tawhid, la brigada Tariq Ibn Ziyad, Subul al Salam, la Brigada al Wadi y Al Kaniyat- y ya fueron claves en el

combate con las Brigadas de Defensa de Bengasi, la milicia radical liderada por el antiguo mufti de Trípoli, jeque Sadeq al Ghariani, vinculado a Qatar. En Trípoli está infiltrado en la Fuerza Especial de Disuasión (RADA), que dirige el poderoso señor de la guerra Abdel Rauf Kara, dueño del ministerio de Interior del GNA y único que no se ha sumado a la defensa de la capital.

En la guerra de Libia, la primera totalmente privatizada de la historia desde que esta tendencia comenzara a extenderse tras la invasión ilegal de Irak (2003), también actúan PMSC estadounidenses, británicas, francesas, italianas, turcas y jordanas, -entre otras muchas-, algunas presentes en el país desde el alzamiento rebelde que en 2011 acabó con la larga dictadura de Al Gadafi. Uno de los primeros emprendedores fue Erik Prince, fundador de la afamada "Blackwater". Perseguido por sus tenebrosas actividades en Irak, Prince se mudó a Abu Dhabi en 2010, poco después de vender su parte en la polémica compañía y allí fundó una nueva, Reflex Responses Company (R2), con la que ha trabajado en todas las primaveras árabes en las que se ha implicado el gobierno emiratí. En mayo de 2011, R2 y la familia Real Al Nahayan firmaron un acuerdo por valor de 529 millones de euros para crear una fuerza de elite llamada "Security Support Group", con un millar de hombres formados en inteligencia y contraterrorismo. Parte de esa legión, formada por soldados de fortuna extranjeros, ha trabajado en el este de Libia, junto a diferentes milicias vinculadas al gobierno de Tobruk y al antiguo Ejército Nacional Libio (LNA), que dirige Hafter. Desde 2015, algunos de esos oficiales extranjeros pilotan aviones de combate IOMAX AT-802 Air Tractors del ejército emiratí, artillados con bombas de fabricación turca, y apoyan desde el aire las operaciones del mariscal.

Los AT-802 emiratíes fueron cruciales durante el cerco a la ciudad de Bengasi, en particular durante el asedio al barrio de Ganfuda, uno de los que resistió hasta el final; y en la ciudad de Derna, uno de los principales bastiones del yihadismo en el norte de África. Y más recientemente lo

son en el actual acoso militar a Trípoli y Misrata. Los aviones suelen despegar desde la base de Al Khadim, en el este de Libia, y llevan el distintivo tapado. Prince, que actualmente dirige la empresa "Frontier Resources Group", nominalmente de transporte aéreo en Africa, niega que sus mercenarios participen en el conflicto. Igual que Rusia, Sudán y el resto de estados implicados en una guerra, la de Libia, devenida en un conflicto armado multinacional sin presencia ni necesidad de Ejércitos nacionales. Y es que las empresas privadas no solo abaratan los ataques y eliminan la responsabilidad frente a las "víctimas colaterales". También sostienen los eslabones cadena la logística, al participar en el transporte de armas y de soldados. Hafter y el gobierno de Tobruk han recurrido a compañías como la moldava Sky Prim Air, vinculada al operador emiratí Oscar Jet. Existen pruebas de distintos vuelos en el interior del país, transportando delegaciones entre bases en Zintan (oeste) y Tobruk (este), en días previos o posteriores a batallas.

El GNA, un gobierno no electo pero reconocido por la comunidad internacional, impuesto por la ONU tras su fallido proceso de paz en 2015, carece igualmente de Ejército. En sus filas se alistan milicias islamistas locales -financiadas desde Qatar-, unidades de Inteligencia del gobierno italiano, mercenarios franceses, italianos y británicos y sobre todo, soldados regulares y fuerzas especiales turcas. A principios de enero pasado, y en pleno avance de las tropas de Hafter hacia el puerto de Misrata, Ankara se convirtió en el primer gobierno en oficializar su injerencia en los asuntos libios. Preocupado, asimismo, por la estrecha relación entre el gobierno de Tobrouk y Chipre, el presidente turco, Recep Tayeb Erdogan, justificó en la necesidad de entibar el frágil alto el fuego negociado con Rusia el envío de "tropas no de combate" al país. Sin embargo, junto a los soldados turcos desembarcaron en Trípoli y Misrata cerca de dos mil mercenarios sirios, en su mayoría combatientes altamente cualificados del opositor "Ejército Nacional Sirio", una plataforma de grupos rebeldes islamistas

que se levantó en armas contra la dictadura de Bachar al Asad y a la que Ankara ha financiado. La mayor parte de ellos pertenecen a la llamada "Sham Legion", aunque también se han detectado unidades de las divisiones "Sultán Mourad" y Moutasim, todas ellas inscritas en el salafismo.

Fuentes de Inteligencia en Trípoli consultadas entonces por la Agencia Efe afirmaron que los combatientes sirios se desplegaron en el sur de la capital y el este de Misrata ,y que permitieron contener el empuje de sus pares sudaneses, chadianos y rusos y reequilibrar el proceso político. A finales de marzo, entre intensos llamamientos de las potencias internacionales y en particular de la ONU para que ambos contendientes aceptaran una "tregua humanitaria" que impidiera sumar a la guerra el miedo real al invisible coronavirus, el Observatorio Sirio de de los Derechos Humanos reveló que al menos 151 mercenarios sirios habían muerto en combates en el sur de Trípoli y en el extrarradio de la ciudad de Misrata desde el inicio de 2020. Según la organización, que vigila el conflicto en Siria desde su estallido del alzamiento contra la dictadura de la dinastía Al Asad, la mayoría de ellos perecieron en frentes del sur de la capital como Al Salah Al-Din, Al Ramlah o Al Hadabah, todas ellas próximas al antiguo aeropuerto internacional, clave para la conquista de la ciudad- y en la vecina ciudad-estado de Misrata, que mantiene lazos históricos, económicos y estratégicos con Turquía y sus cadáveres fueron repatriados a Siria y enterrados en las zonas bajo el control de las milicias "Escudo del Eúfrates", en la región de Alepo. Pertenecían, asegura el Observatorio a grupos de la oposición rebelde siria como las divisiones Al-Mutasim, Sultan Murad y las brigadas Suqur Al-Shamal Al-Hamzat y Suleiman Shah, explicó la fuente y formaban parte de un total de 4.750 mercenarios sirios al parecer reclutados por Turquía. Otros 1.900 se encontraban entonces en Siria completando su instrucción antes de ser enviados al norte de África aseguraba.

"La guerra y el contrabando son dos

negocios muy rentables en Libia, y mientras eso siga así, no hay interés en que se acabe el conflicto", explica un agente de Inteligencia europea destinado en la zona. Una situación que recuerda a la que vive Siria, donde Turquía y Rusia, a través del negocio de la guerra y el apoyo de los distintos aliados árabes, han aprovechado los nuevos intereses geopolíticos de EEUU y el retroceso de las potencias europeas para repartirse el país y comenzar a recuperar la influencia ancestral perdida. Y sin tenerse que preocupar por eso que llaman los derechos humanos. **FIN**

Un informe de Javier Martín